

los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores de la violencia oficial

Ricardo Arias*

El 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, constituye un momento de particular importancia en la historia de Colombia. En primer lugar, son muchos los que aún hoy, cincuenta años después de su muerte, consideran que ese "magnicidio" frustró indefinidamente las esperanzas de todos aquellos que veían en Gaitán la posibilidad de acceder a una sociedad realmente democrática, más justa, menos excluyente. Esta imagen tradicional que se tiene del "caudillo del pueblo" se encuentra legitimada, entre otros aspectos, por numerosos escritos en los que Gaitán aparece, invariablemente, como una especie de mesías que, una vez llegara a la presidencia, iba a solucionar muchos de los males que en ese entonces aquejaban a la sociedad colombiana. Los testimonios de muchísimos colombianos que vivieron la época de "la violencia" corroboran esa misma imagen en la que Gaitán aparece como el abanderado en la lucha contra las injusticias sociales, la corrupción, la exclusión política, etc¹. Los estudios que se alejan de esta imagen, por el contrario, son muy escasos, pero algunos de ellos tienen el mérito de ser lo suficientemente sugestivos como para cuestionar, en cierta medida, la imagen que se ha hecho de Gaitán².

La importancia del viernes 9 de abril también se puede apreciar en otros aspectos. La muerte de Gaitán provocó verdaderas insurrecciones populares en diferentes lugares del país (las llamadas "juntas revolucionarias" se tomaron el poder en dife-

* *Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, candidato a Ph. D. en la Universidad de Aix-en-Provence, Francia.*

rentes localidades y subvirtieron momentáneamente el orden). Por otra parte, a partir de esa fecha, la violencia, que ya venía manifestándose con una gran intensidad desde tiempo atrás, adquirió un ritmo particularmente escalofriante. El dis-tanciamiento entre el bipartidismo se acentuó, haciendo cada vez más difícil establecer gobiernos de coalición. Además, el Ejército, que hasta entonces había conservado una cierta neutralidad en medio de todos los conflictos, empezó a identificarse con el gobierno. Pero lo que nos interesa en este artículo es destacar otro aspecto, quizá menos conocido por el público en general a pesar de que guarda, a nuestro parecer, una gran importancia. Se trata de la interpretación que hicieron del 9 de abril tanto el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), como las élites en general. Ese tipo de lectura de lo sucedido aquel fatídico viernes justificó -y sigue justificando hoy en día- la respuesta violenta por parte de todos aquellos que vieron en la irrupción de los marginados políticos y sociales una amenaza para el "orden" establecido. En ese sentido, lo sucedido el 9 de abril de 1948 fue aprovechado por la clase dirigente para darle una determinada interpretación ideológica a partir de la cual se pudieran deslegitimar las reivindicaciones de los sectores excluidos, estrategia que sería -el tiempo se ha encargado de demostrarlo- de una gran eficacia para acallar todo brote de oposición. Es decir que en el mismo momento en que las masas populares creían adquirir su independencia como actores sociales -¿acaso no salieron, por su propia cuenta, a vengar la muerte del "líder" social, atacando y destruyendo todos los símbolos que representaban el poder?-, lo que en realidad se estaba presenciando era su desmantelamiento como actores autónomos. Hoy en día, cincuenta años después, no se vislumbra aún, en el escenario político colombiano, un movimiento o partido de oposición que ofrezca una alternativa sólida, creíble y legítima frente al bipartidismo tradicional.

La interpretación que la mayoría de los sectores de la clase dirigente hizo del 9 de abril está basada en una lectura sesgada de los acontecimientos. Antes del asesinato de Gaitán, el país ya estaba inmerso en una profunda violencia en la que se mezclaban todo tipo de causas. Las 14.000 muertes violentas correspondientes a 1947 demuestran claramente que la violencia no comenzó el 9 de abril³; los años 30, cuando los liberales retomaron el poder después de una abstinencia de medio siglo, estuvieron plagados de enfrentamientos bipartidistas; y la década anterior se había caracterizado por la violencia entre campesinos y terratenientes, por un lado y, por otro, entre el proletariado y el patronato (recordemos las bananeras y su cruento desenlace). Pero a pesar de ello, los sectores dirigentes insistieron en que la violencia sólo comenzó realmente el 9 de abril con el asesinato de Gaitán, y sobre todo con los desmanes del "populacho". Juan Uribe Cualla, citado en la *Gran Mancha Roja*, ilustra muy bien esa concepción de una Colombia idílica y ejemplar

en todos los aspectos, a la que "más de cien años de historia le habían consagrado como modelo de orden y exponente auténtico de la grandeza de los proceres, de la obra de los libertadores y de las vidas admirables de estadistas ilustres, de sus poetas inmortales y de sus varones eximios". Ospina Pérez, para quien los hechos del 9 de abril también constituyeron una amenaza al buen nombre de Colombia, invitaba a los ciudadanos a restablecer el orden que tanta fama le había dado al país a nivel internacional: "El Presidente pide a todos los buenos hijos de Colombia [...], que contribuyan en esta hora de prueba con el aporte de su sensatez y de su prudencia para que no se hunda el prestigio republicano y democrático de la Patria, que tan orgullosamente enarbolamos ante la América invitada a reunirse en esta ciudad capital"⁴.

Ese clima de violencia que se produjo el 9 de abril se extendió mucho más allá de lo esperado; para ciertos sectores de la sociedad, como ya lo indicamos, fue el inicio de una ola de terror que se iba a apoderar de Colombia. Casi tres años después de ocurridos los hechos, el presidente Laureano Gómez decía que la tarea central de su gobierno consistía en "la reconquista de la tranquilidad pública perturbada tan profundamente como consecuencia de la subversión del 9 de abril..."⁵. Muchos años después, el general Fernando Landazábal, por ese entonces ministro de Defensa del gobierno Betancur, afirmaba categóricamente que el partido comunista era el responsable de la violencia que "le ha costado al campo desde 1948 más de 30.000 campesinos asesinados por guerrilleros comandados, dirigidos, auspiciados y sustentados por el partido comunista"⁶.

Más grave aún: si analizamos ciertos comentarios que se siguieron emitiendo en torno a los sucesos de aquella fecha, encontramos que el 9 de abril, más que una interrupción pasajera de la paz y de la tranquilidad que supuestamente caracterizaban a nuestra sociedad, representó el inicio de una profunda descomposición social, el desplome del orden tradicional. Un editorial publicado en 1953 por el periódico *El Siglo*, intitulado "El día de la abominación", afirmaba que "el 9 de abril aún no ha concluido. Esta ola de bandolerismo que ha assolado el país en estos cinco años es fruto consecencial de esa fecha. Bajo esa negra noche, que el resplandor de las llamas criminales hacía moralmente más oscura, quedó desecha toda la tradición de la república, despedazada su alma, desfigurado su carácter. Apenas la mano providente de Dios, pudo salvar a nuestros mandatarios, conservar a nuestro partido en el poder y dejarnos un resto de patria para volverla a edificar de nuevo [...]. 9 de abril, día de abominación, ¡quién pudiera arrancarte de la historia colombiana para no seguir avergonzándonos con tu recuerdo!"⁷

El 9 de abril debe ser entonces enfáticamente condenado porque fue una manifestación anárquica, caótica y llena de violencia, que se ensañó contra las "autoridades legítimas" y, más grave aún, contra las instituciones sagradas: en efecto, la Gobernación y el Palacio de Justicia fueron incendiados en Bogotá, y muchas otras sedes del poder fueron arrasadas en otros lugares del país, al mismo tiempo que edificios, templos y centros educativos católicos, como el Palacio Arzobispal, la Nunciatura y la Universidad Javeriana Femenina, quedaron completamente destruidos. Ante la magnitud de los daños ocasionados, ante la afrenta que significó el ataque a los símbolos más representativos del poder, la condena era un primer paso para tratar de restablecer el "orden". La cárcel y la excomulgación cayeron rápidamente sobre los responsables de tan oprobiosos hechos⁸. Pero la condena no bastaba, por más severa que fuera. Lo que habría que hacer es borrar ese recuerdo tan escabroso de nuestra historia, no solamente por la vergüenza de lo acaecido, sino porque su origen, su verdadero origen, no podía encontrarse dentro de las fronteras colombianas ni en las almas católicas de nuestra comunidad. Monseñor Perdomo, arzobispo primado, dijo lo siguiente en una alocución realizada el 12 de abril, tres días después de las revueltas: "En esta hora de inmensa tribulación para nuestra amada Patria, y con el corazón profundamente acongojado ante los extremos de perversidad y de locura a donde vemos que ha sido llevado nuestro pueblo, por obra de extrañas influencias, destructoras no sólo de todo orden moral y religioso, sino además de todo ideal patriótico, y de todo sentimiento humanitario, no podemos menos de reprobar [...] los horrendos atentados y delitos..."⁹. El presidente Ospina pensaba que el origen del problema había que buscarlo más allá del bipartidismo, es decir en unos terrenos forzosamente nocivos para el país: "Quiere el Presidente con toda exactitud llamar la atención de los colombianos amantes de la Patria sobre el hecho de que el curso que han tomado los acontecimientos ya no es de partido liberal ni de partido conservador, sino de tremenda amenaza a las instituciones básicas de Colombia y a la vida, honra y bienes de los asociados"¹⁰. El origen, el verdadero origen del mal, provenía entonces del exterior: del comunismo internacional que, apoyado en sus escasos pero peligrosísimos secuaces criollos, quisieron sembrar el terror en el país para, en medio del caos, tomarse el poder.

El autor de la *Gran Mancha Roja* insiste sobremanera, desde el comienzo hasta el final, en el mismo argumento. Sin embargo, las imágenes y el texto de esta historieta suministran otro tipo de información acerca de los responsables, lo que nos permite tener una idea mucho más clara de los "revoltosos"; este tipo de precisiones resulta valiosísimo para entender la imagen que hace el autor del "culpable". En primaria instancia, se señala explícitamente al comunismo. Esta corriente ideológica defiende una serie de postulados que amenazan, dentro de la óptica de los

dirigentes, las bases de la sociedad colombiana. Pero si leemos atentamente el texto y observamos con detenimiento las ilustraciones nos damos cuenta que, al lado del comunismo, lo que está surgiendo, lo que está irrumpiendo, amenazante, en el escenario, es el proletariado, designado peyorativamente como el "populacho". Es decir, la amenaza suscitada por el enemigo adopta simultáneamente una faceta política -el comunismo- y una social -los sectores populares. Pero *La Gran Mancha Roja* va aún más allá. El 9 de abril no es percibido simplemente como un conflicto político entre partidos opuestos, lo que no tendría nada de novedoso; tampoco, de manera exclusiva, como un enfrentamiento de clases¹¹; más precisamente, es percibido como la irrupción, violenta, inesperada, del horror, del terror, en resumidas cuentas de la Barbarie. El 9 de abril, el "viernes rojo", fue la lucha entre la civilización y el caos, entre la cultura y el salvajismo ("el pueblo no quería cultura", nos dice el autor de las ilustraciones). Fue, en último término, un combate entre las fuerzas del Bien y las del Mal. En efecto, ese "día de la abominación" se levantaron, "energúmenos" y "enloquecidos", los "revoltosos criminales", para dar rienda suelta al "estallido de las pasiones más insanas y de los más bajos y primarios instintos". Los rostros de los "revoltosos", desencajados, llenos de ira (en claro contraste con la perfecta serenidad y mesura que expresan los representantes de las élites), no hacen sino corroborar la imagen de una masa violenta, incontrolable, desenfrenada, que es representada destruyendo, saqueando, trastocando osadamente el orden ("Pobres y descalzas mujeres de las barriadas bogotanas, llevaban sobre sus hombros pieles de cuantioso precio..."). En pocas palabras, se quiso desviar a nuestra patria de sus destinos históricos...

Y esta percepción del enemigo -y de los hechos- fue compartida por las élites en general, sin distinciones políticas. Es cierto que liberales y conservadores se acusaron mutuamente de asesinar a Gaitán. Pero tan pronto entendieron que lo que estaba en juego era el bipartidismo y su permanencia en el poder, los dirigentes de los dos partidos hicieron hasta lo imposible para deslegitimar la revuelta del 9 de abril. Los directorios de los dos partidos, luego de una reunión con el presidente Ospina, dieron a conocer el siguiente comunicado: "El grave clima de exacerbación política creado por el execrable (sic) asesinato del señor Jorge Eliécer Gaitán constituye un serio peligro para la paz pública y amenaza con torcer el rumbo histórico de la Nación. Los directorios de los dos partidos se hallan de acuerdo en la necesidad de restablecer la calma y la normalidad, no sólo para salvar al país de esos gravísimos peligros, sino también para poder encauzar el esfuerzo unido de todos los colombianos hacia la reconstrucción moral y material del país, tan seriamente quebrantada por designios extraños que sorprendieron a los dos partidos históricos en sus métodos de lucha cívica"¹². Como se puede apreciar de manera muy clara, los diri-

gentes del bipartidismo, profundamente angustiados ante la ira popular, condenaron de inmediato a los manifestantes por interrumpir violentamente el orden tradicional. Lo que se aprecia, en el fondo, es que "los principales representantes del liberalismo se vieron tan sorprendidos y asustados por la magnitud y las posibles consecuencias del levantamiento popular como los dirigentes conservadores y el clero; esta actitud se puede apreciar en la prensa liberal que, al igual que la conservadora, denunció la amenaza comunista y justificó los acercamientos entre los dos partidos" so pretexto de defender las instituciones democráticas¹³. El nuevo gobierno de coalición, constituido por los dirigentes de los dos partidos horas después del asesinato de Gaitán, es una muestra del afán con el que liberales y conservadores querían hacer frente común para resistir los embates de los sectores populares.

Lo esencial, para todos estos sectores dirigentes, era condenar un movimiento que amenazaba, como nunca antes había sucedido en nuestra historia, el orden establecido. Para ello, a un movimiento con claros tintes sociales y políticos se le descontextualizó completamente de la realidad nacional para reducirlo tan sólo a la política expansionista del comunismo internacional; y a sus actores se le dieron los peores epítetos para reducirlos al nivel de los más peligrosos y bestiales criminales.

De ahí la represión: el enemigo, el verdadero enemigo para la "democracia", deja de ser el otro partido cuando lo que está en juego no es simplemente el reparto del poder, sino la eventualidad de que surja un movimiento contestatario autónomo con deseos de cambiar las reglas de un juego monopolizado históricamente por el bipartidismo. Es precisamente ese el significado que queremos destacar del 9 de abril: esa fecha, gracias a la lectura que de ella hicieron los sectores dirigentes (la irrupción de la barbarie), sirvió para justificar plenamente una política represiva contra los sectores contestatarios, en el mismo momento en que las tensiones sociales aumentaban en toda América latina y las élites del continente se creían amenazadas por el populismo. Pero ese momento también coincidió con los inicios de la Guerra fría. La represión, entonces, se hacía en nombre tanto de los "principios occidentales" (la democracia, el capitalismo), como de los "valores colombianos" (la religión católica y sus representantes, las autoridades "legítimamente elegidas", nuestra "cultura" y "civismo", etc.). "En realidad el 9 de abril había servido de pretexto a las clases dominantes para una completa reorganización del Estado el cual, al término de 1948, se encuentra financieramente fortalecido, ampliados y cualificados sus aparatos de represión, extendidos sus mecanismos de control político y social. La Ley 82 de diciembre 10 de 1948 mediante la cual se concede «amnistía a los procesados o condenados por delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado, cometidos con ocasión de los sucesos

del 9 de abril», es a lo sumo una contraprestación a la colaboración liberal en este proceso de reordenamiento estatal pero no un signo de debilidad frente a un peligro potencial. Las clases dominantes disponen ya de todas las armas para enfrentar el más mínimo brote de rebeldía de las masas"¹⁴.

El 9 de abril fue eso para las élites, una oportunidad más para deslegitimar al "exterior de lo social": el populacho, los revoltosos, los salvajes. Y como lo dijimos desde un comienzo, la historia, en ese sentido, no ha cambiado mucho cincuenta años después, pues hoy en día los campesinos movilizados, los trabajadores en huelga, los defensores de los derechos humanos, y tantos otros sectores e individuos, siguen siendo vistos por el Estado y por una parte de la sociedad como elementos manipulados por las guerrillas comunistas y, por eso mismo, altamente peligrosos para el país. En el fondo, el "otro", cualquiera sea su rostro, no tiene cabida en una sociedad que ha erigido a la intolerancia y a la exclusión en pilares básicos de su funcionamiento. Es por ello que la asombrosa debilidad de los movimientos de oposición, que ha caracterizado a Colombia a lo largo de toda su historia, no puede ser desligada de esa visión que, desde las altas esferas, se ha tenido -y se ha difundido exitosamente- del "otro", visión que legitima la represión sistemática con que éste ha sido combatido. No olvidemos que la estabilidad de nuestra "democracia" ha reposado en regímenes de excepción. Dentro de ese contexto, las recientes advertencias dirigidas por la Comunidad Europea al gobierno colombiano por su tendencia a criminalizar las protestas sociales resultan sin duda refrescantes, pero, al mismo tiempo, no deja de ser profundamente vergonzoso y humillante que la atención de un país en torno al respeto de los derechos humanos esté determinada por las presiones económicas de la comunidad internacional.

notas

¹ El libro clásico de Arturo Alape -*El bogotano. Memorias del olvido: 9 de abril de 1948*, Bogotá, Ed. Planeta, 1987-, así como algunos de los trabajos realizados por Alfredo Molano -en particular *Los años del tropel*, Bogotá, Cerec-Cinep-Estudios rurales latinoamericano, 1985-, permiten apreciar lo que representaba Gaitán para amplios sectores de la sociedad.

² Nos referimos especialmente a los trabajos de Daniel Pécaut, en particular *Orden y violencia*, vol. II, Bogotá, S. XXI, 1987, pp. 364-485, y "De las violencias a la violencia", en *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, Cerec, 1986, pp. 188-190.

³ OQUIST, Paul, *Violencia, política y conflicto en Colombia*, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, 1978, p. 59.

⁴ *Revista javeriana*, número 144, mayo 1948, pp. 185-186.

⁵ El Siglo, 31 de diciembre de 1950.

⁶ El Tiempo, 7 de octubre de 1982.

⁷ El Siglo, 27 de marzo de 1953.

⁸ Revista Javeriana, número 144, mayo 1948, p. 194.

⁹ Ibid., pp. 193-194.

¹⁰ Ibid., número 145, junio 1948, p. 229.

¹¹ Si bien es cierto que los manifestantes atacaron y saquearon muchos locales comerciales y hon lujo, lo que puede ser considerado como una manifestación del odio de clases, no hay que olvidar sin embargo que la oligarquía liberal no fue víctima de la acción de los "revolucionarios".

¹² Revista Javeriana, número 144, mayo 1948, p. 187.

¹³ ARIAS, Ricardo, 9 de abril de 1948, Bogotá, Panamericana Editorial, 1998, pp. 39-40.

¹⁴ SANCHEZ, Gonzalo, Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Bogotá, Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983, p. 152.